

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente.

Apelación – Auto	
DEMANDANTE	CESAR EUGENIO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DEMANDADO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU.
RADICADO	05001-31-05-016-2021-00027-01
TEMAS	Graduación de las costas
DECISIÓN	Modifica valor fijado

Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor CESAR EUGENIO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ contra la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU.

La Magistrada Sustanciadora, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, declaró abierto el acto y a continuación, después de

deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el ACTA No 033, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

A N T E C E D E N T E S

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante, contra el auto proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de esta ciudad el día 16 de septiembre de 2020, el cual impartió aprobación a la liquidación secretarial de costas procesales impuestas en la respectiva instancia.

Al respecto, debe recordarse que el señor CESAR EUGENIO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ solicitó judicialmente la declaratoria de un contrato realidad con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU cuyos extremos temporales estuvieron comprendidos entre el 22 de junio de 2011 y el 6 de mayo de 2016, y que finalizó sin justa causa imputable al empleador, en consecuencia, se condene a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, al reconocimiento y pago de: prestaciones sociales, sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías a un fondo, aportes a seguridad social, devolución de lo deducido a título de retención en la fuente, reajuste de salarios y prestaciones sociales, sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales, indemnización por despido ilegal e injusto, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

En sentencia del 6 de diciembre de 2017, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que entre el señor CESAR EUGENIO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, no existió contrato realidad entre el 22 de junio de 2011 y el 5 de noviembre de 2013, y que a partir del día siguiente, esto es, el 6 de noviembre de 2013 y hasta el 6 de mayo de 2016, el actor se desempeñó como trabajador oficial

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, vinculación que finalizó de manera unilateral y con justa causa por parte de la entidad accionada, también declaró prospera la excepción de prescripción, respecto de las prestaciones causadas con anterioridad al 7 de mayo de 2013, a excepción del auxilio de cesantías, y aportes a seguridad social.

En consecuencia, absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra, e impuso las costas del proceso a cargo del demandante, fijándole como agencias en derecho la suma de \$737.717.

La sentencia de primera instancia fue conocida por este Tribunal de Distrito Judicial en apelación presentada por el apoderado judicial del demandante, habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 6 de febrero de 2020, mediante la cual se REVOCÓ la sentencia de primer grado, en cuanto negó la declaratoria del contrato realidad solicitada por el actor, para en su lugar, DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el señor CESAR EUGENIO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ, como trabajador oficial y la demandada EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-como empleadora, sin solución de continuidad, del 22 de junio de 2011 y hasta el 6 de mayo de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, se CONDENÓ a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU a pagar al actor, lo correspondiente a las cesantías del período comprendido entre el 22 de junio de 2011 al 5 de noviembre de 2013, prestaciones sociales causadas entre el 7 de mayo de 2013 al 5 de noviembre de 2013, para un total de \$16.186.986, suma que deberá ser indexada al momento del pago.

Se CONFIRMÓ en todo lo demás la sentencia de primera instancia, y en relación a la condena en costas procesales, se

concluyó que no había lugar a ellas en segunda instancia, y que las de primera instancia estarían a cargo de la entidad demandada y en favor del actor, quedando la tasación de las agencias en derecho deberán a cargo del juzgado de origen.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA

Una vez surtido el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial del demandante, fue devuelto el expediente al juzgado de origen, la *A Quo* mediante auto del 16 de septiembre de 2020, ordenó que a través de trámite secretarial se liquidaran las costas procesales, por las siguientes sumas:

- AGENCIAS EN DERECHO en 1ª Instancia a cargo de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU, y a favor del señor CESAR EUGENIO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ la suma de **\$485.610** a cargo de la parte demandada y a favor del demandante, equivalente al 3% de la condena, según lo dispone el literal a) de los procesos de primera instancia que menciona el numeral 1º del artículo 5º del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.
- AGENCIAS EN DERECHO en 2ª Instancia, **\$0.**
- Gastos acreditados en el proceso, **\$0.**

TOTAL, a pagar EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU \$485.610.

En providencia de la misma fecha, se le impartió aprobación a dicha liquidación por parte de la *A Quo*.

El apoderado judicial del demandante recurrió en reposición y en subsidio apelación el valor liquidado por concepto de costas procesales.

El juez de primera instancia, mediante auto del 7 de marzo de 2022 (archivo PDF N° 15 del expediente digital), declaro la extemporaneidad del recurso de reposición, y a través de esa misma

providencia, concedió el recurso de apelación ante esta Corporación, en el efecto suspensivo.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Sustentó su inconformismo con la tasación de costas procesales, argumentando que en el presente asunto las agencias en derecho en primera instancia debieron fijarse en una suma superior, pues el valor liquidado por la *A Quo* resulta ínfimo en relación al tipo de proceso, la naturaleza del asunto, la duración, la gestión realizada por el mandatario judicial, y desconoce los criterios y tarifas establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos 1887 de 2003, y PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, motivos por los cuales solicita la modificación de esta liquidación, y se imponga una condena acorde al capital ordenado en la sentencia, que fue de \$21.411.292.

Alegatos de conclusión

No se presentaron alegatos de conclusión en segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas de un proceso corren a cargo de *“...la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...”*.

Dicha disposición consagra un criterio objetivo que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis.

Las costas del proceso comprenden, de un lado, los gastos judiciales que haya hecho la parte beneficiada con la condena y que aparezcan comprobados en el expediente y del otro, las agencias en derecho, en las que, para su fijación por el juez *“deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”* (Artículo 366, numeral 4° del CGP).

De otro lado, el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece en su artículo 2° los criterios a tener en cuenta para la fijación de tales emolumentos:

“ARTÍCULO 2°. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

PARÁGRAFO. Cuando el asunto objeto del proceso esté relacionado con la violencia de género y dentro de él se hayan acreditado las circunstancias constitutivas de la misma, el funcionario judicial al fijar agencias en derecho deberá realizar una valoración favorable de cargas y costos para las mujeres víctimas de aquella.”

Seguidamente, en lo que atañe a la tasación de las agencias en aquellos en los PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL, el mencionado acuerdo prescribe:

“ARTÍCULO 5°. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

En única instancia.

a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.

b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.

En primera instancia.

a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.

(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.

En segunda instancia.

Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”

CASO CONCRETO

Vigencia de las normas reguladoras de la tasación de agencias en derecho en el Sub lite:

En el presente caso resulta aplicable la regulación establecida en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una demanda presentada en el 15 de noviembre de 2016 (fls. 21 del archivo PDF N° 01 expediente digital).

También destaca la Sala que, al tratarse de un proceso ordinario laboral declarativo de doble instancia, y resultar la resolución de las instancias desfavorable para los intereses de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, el numeral 1° del artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, establece con absoluta claridad que las agencias en derecho en primera instancia tratándose de asuntos con cuantía al contener la demanda pretensiones de contenido pecuniario, podrán ser tasadas por el administrador de justicia en una suma que puede oscilar entre uno

el 3% y el 7.5% de lo pedido, en aquellos de mayor cuantía, toda vez que la condena proferida consistió en la declaratoria de un contrato realidad, sin solución de continuidad entre el 22 de junio de 2011 y el 6 de mayo de 2016, en la que el demandante CESAR EUGENIO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ detentó la calidad de trabajador oficial y la demandada EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU, la calidad de empleadora, en consecuencia, se condenó al pago indexado de cesantías por el período comprendido entre el 22 de junio de 2011 y 5 de noviembre de 2013, y las prestaciones sociales causadas entre el 7 de mayo de 2013 al 5 de noviembre de 2013, para un total de **\$16.186.986.**

Y en el presente caso la condena por AGENCIAS EN DERECHO en la primera instancia (\$485.610) es una suma equivalente a 3% de lo adeudado por concepto de prestaciones sociales, es decir, el valor fijado por la *A Quo*, se encuentra dentro de los topes a los que alude el numeral 1° del artículo 5° del referido acuerdo.

Sin embargo, este porcentaje del 3% es el mínimo permitido por la citada normativa, y se debe utilizar en aquellos asuntos donde la complejidad y duración del proceso fue exigua, es decir, en asuntos de pleno derecho que no representen para las partes y el funcionario judicial un desgaste procesal y probatorio durante el desarrollo de la Litis.

Hipótesis que no aplica al caso concreto, donde sí hubo necesidad de practicar prueba testimonial tendiente a la demostración de la existencia de una relación laboral entre las partes, y que implicó una rigurosa valoración probatoria en ambas instancias para resolver el problema jurídico planteado.

Sumado a ello, tampoco puede perderse de vista, la duración media del proceso ordinario laboral, cuya demanda fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial de Medellín el día 15 de noviembre

de 2016, y culminó con la sentencia de segunda instancia el día 26 de febrero de 2020, esto es, 3 años y 3 meses después, pues la sentencia de primer grado debió ser apelada por el apoderado judicial del demandante en procura de sus intereses laborales.

Así las cosas, esta Sala comparte los argumentos del recurrente en punto a que la tasación de las Agencias en Derecho ha debido ser una suma superior a la fijada por la *A Quo*, atendiendo los criterios establecidos en el artículo 2° del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, relativos a la gestión desplegada por el mandatario judicial, la complejidad del proceso, las excepciones formuladas, el tiempo transcurrido en las instancias, entre otros, mismos que le permiten a la Sala aumentar el valor de las agencias en derecho en segunda instancia a la suma de **OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$809.349)**, equivalente al 5% del valor de las condenas, sin que haya lugar a imponer el tope máximo permitido (7%) al no haber prosperado la totalidad de las pretensiones.

Sin necesidad de mayores apreciaciones sobre el caso, se modificará la providencia que se revisa en apelación de fecha y origen conocidos.

Sin COSTAS en esta instancia.

D E C I S I Ó N

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**,

R E S U E L V E:

Primero. MODIFICAR la providencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, en el sentido de aumentar el valor fijado por concepto de agencias en derecho en la primera instancia, la cual

quedará en la suma de **OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$809.349)**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin Costas en esta instancia.

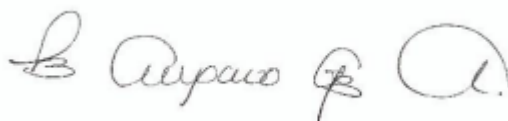
Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto, y devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

(Sin firma por ausencia justificada)

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 130 del 27 de julio de 2022.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>